

Cartagena de Indias. D. T y C. 12 de febrero de 2024

Señor

JUZGADO 006 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA

E.S.D.

Demandante: **DELCY DEL CARMEN VELASQUEZ JIMENEZ**

Demandado: **COLPENSIONES.**

Radicado: 13001310500620230019000

Proceso: ORDINARIO LABORAL

ASUNTO: MEMORIAL CONCEPTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN

BERNARDO JOSÉ BALLESTERO PETRO, mayor de edad, identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía No. 1.143.349.693 de Cartagena, abogado(a) en ejercicio con T.P. No. 228.332 del C.S. de la J., actuando como Apoderado Sustituto de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, tal como consta en el poder que obra en el Expediente, me permito aportar CERTIFICACIÓN No. 123452023, emitido por la SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL, dentro del proceso de referencia, en el cual la entidad demandada, manifiesta NO PROPONER FORMULA CONCILIATORIA, esto con el fin de que se tenga en cuenta en la audiencia de conciliación a celebrar.

ANEXOS

- Certificación No.123452023 de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

Respetuosamente,



BERNARDO JOSÉ BALLESTERO PETRO
CC. 1.143.349.693 de Cartagena
TP. No. 228.332 DEL C.S. DE LA J.

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

CERTIFICACIÓN NO. 123452023

La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

CERTIFICA

Que tal y como consta en el Acta No. 128-2023 del 4 de agosto de 2023 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del caso **DELCY DEL CARMEN VELASQUEZ JIMENEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No **45425730**, en proceso bajo radicado No **13001310500620230019000**, quien pretende, se declare la nulidad e ineficacia del traslado y afiliación efectuado a la AFP COLFONDOS y PORVENIR S.A. y, en consecuencia se reactive la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES.

Dicho órgano decidió:


NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

Según los lineamientos establecidos en el manual de Defensa Judicial, emitido por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones el presente asunto no se fórmula propuesta conciliatoria en atención a lo siguiente: Delcy del Carmen Velásquez Jiménez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 45425730 que se declare la ineficacia de la afiliación efectuada al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A. En consecuencia, se ordene a COLPENSIONES, registrar la afiliación de la demandante al Régimen de Prima media con Prestación Definida como si nunca se hubiera trasladado en virtud del regreso automático. Se condene en costas y agencias en derecho a las demandadas.

Sea lo primero manifestar que la actora nació el 01 de mayo de 1957, registrando su afiliación al régimen de prima media administrado por la Extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE a través del empleador Distrito Integrado de Salud de Cartagena en el año 1984. En el mes de agosto del 2000 es trasladada a la AFP COLFONDOS S.A, donde cotizó aproximadamente 90,4 semanas. Posteriormente en el mes de mayo de 2002 se traslada a la AFP PORVENIR S.A, donde se encuentra afiliada actualmente, registrando aportes de 1049,1 semanas, para un total de 1139 semanas cotizadas en toda su vida laboral, según el reporte de semanas emitida por PORVENIR S.A.

Ahora bien, consultadas las bases de datos con que cuenta la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, no se registra información de afiliación efectuada por parte de la señora Delcy del Carmen Velásquez Jiménez, no generándose historia laboral por parte de COLPENSIONES, de acuerdo con certificación emitida por la Subdirección de Historial Laboral de COLPENSIONES.

Nótese a prima facie que la aquí demandante nunca estuvo afiliada al ISS hoy COLPENSIONES, su afiliación al régimen de prima media con prestación definida fue con CAJANAL, entidad que era independiente al ISS Hoy COLPENSIONES, pues ante su liquidación el Decreto 2196 de 2009 estableció que el reconocimiento pensional de los afiliados de la administradora liquidada estaría a cargo de la UGPP y por otro lado, la información e historias laborales de sus usuarios sería trasladada a la administradora a la que quedarán afiliados, y en el presente caso, se insiste la demandante nunca estuvo afiliada al ISS de conformidad con el Art 4 del decreto previamente mencionado.

	Certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Quiere todo lo anterior significar que, Colpensiones no está llamada en la presente demanda a referirse sobre las pretensiones principales de la misma; toda vez que la solicitud está encaminada a la declaratoria de ineficacia de traslado del RPM con el entonces CAJANAL EICE a la AFP COLFONDOS y PORVENIR S.A., no siendo de cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, pronunciarse sobre la misma.

Refuerza aún más lo anterior, lo concerniente al desarrollo del objeto social principal de Colpensiones, definido en el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, que dispone:

Adicionalmente crease una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las pensiones.

Bajo el anterior panorama normativo, Colpensiones, al ser la Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida, no es responsable de las peticiones que se pretenden declarar con la presente demanda, al no ser la competente para resolver de fondo la solicitud de la actora.


En ese orden de ideas el Código de Procedimiento Laboral en su artículo 25 No. 2º y 6º., así como el Código General del Proceso Art. 88 No. 2º y 4º establecen en lo que respecta a requisitos de la demanda lo siguiente:

1. El nombre de las partes y el de su representante... 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.

Así las cosas, se tiene que la legitimación por pasiva es la figura mediante la cual se identifica plenamente quien es la parte demandada en un proceso judicial, de tal manera que, ésta pueda ejercer desde el primer momento su derecho fundamental a la defensa.

En este entendido, mediante Sentencia del 25 de mayo de 2011, expediente: 20146 del 19 de octubre de 2011 y expediente 19630, El Consejo de Estado, órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, sentó lo siguiente: “Con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, (Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.) de forma tal, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas.

Bajo esa línea, no sobra recordar lo dicho por la Sala en tal sentido, a saber:

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.

En conclusión, teniendo en cuenta que no se guarda ningún tipo de relación entre Colpensiones y las pretensiones principales de la demanda, no es posible proponer acuerdo conciliatorio por este concepto.


No obstante, lo anterior, y si en gracia de discusión se asumiera que COLPENSIONES sería el fondo al cual debiera retornar la asegurada, en caso de que el Despacho declare la ineficacia del traslado al RAIS, expondremos las razones por las cuales el mismo no estaría llamado a prosperar en los siguientes términos:

"En el caso de marras, es necesario traer a colación, lo manifestado por la Corte Constitucional donde se estudió la Exequibilidad del artículo 2 de la ley 797 de 2003 pronunciamiento dado en la sentencia SU 062-2010, C 1024- 2004 y C 625-2007 resultando de este dicho que la limitación e imposición consignada en este articulado es totalmente legal, exequible y vigente al imputar la imposibilidad de que los afiliados pudieran cambiarse de régimen de pensiones faltando menos de 10 años para cumplir la edad pensional pues esto garantiza la estabilidad financiera del sistema general de pensiones y atestigua por la justicia, solidaridad y equidad de los demás afiliados; recordemos que en dicha misiva no solo se estudia lo antes descrito sino también cuales afiliados tenían la posibilidad de migrar entre un régimen y otro en cualquier tiempo, requisitos a saber que la hoy demandante no cumple; toda vez que actualmente tiene 58 años, y en su momento cotizó al RPMD 95,71 semanas, por ello, se trae a colación lo siguiente:

"La anterior normativa prescribía que los afiliados al sistema de seguridad social en pensiones sólo podían trasladarse de régimen por una sola vez cada tres años, contados a partir de la selección inicial. El artículo 2 de la ley 797 de 2003 modificó la disposición mencionada y aumentó el período que deben esperar los afiliados para cambiarse de régimen pensional a cinco años. Además, incluyó una prohibición: el afiliado no podrá trasladarse cuando le falten diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Prohibición que empezó a regir un año después de la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003."

Como se puede ver, la modificación no se refiere específicamente al caso de las personas cobijadas por el régimen de transición, pero, indirectamente, regula su situación pues ni ellos ni los demás a filiados podrán trasladarse de régimen cuando les falten 10 años o menos para cumplir edad que requieren para adquirir la pensión de vejez."

Importante asimismo indicar que para el presente caso, la afiliada al momento de suscribir el contrato de afiliación al RAIS a través de la AFP COLFONDOS y PORVENIR S.A., celebró un negocio jurídico de carácter bilateral, en el que Colpensiones no podía participar ni activa ni pasivamente, dado que para ese momento no se encontraba en vigencia la Ley 1748 de 2014, norma a partir de la cual se estableció el deber legal de las administradoras del Sistema General de Pensiones de brindar al afiliado doble asesoría como condición previa para proceder al traslado de regímenes pensionales. En ese orden de ideas, y para el caso en concreto, al suscribirse un negocio en el que los efectos del mismo es interpartes conforme a lo normado en el artículo 1602 del Código Civil, no es viable vincular a un tercero como Colpensiones, a que asuma consecuencias de una decisión de la cual no participó.

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Lo anterior, entendido desde el punto de vista de la inoponibilidad (mecanismo protector), en la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros. Es decir, que la ineficacia o nulidad, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.


De la misma manera, la Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que “valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados”, raciocinio, que a su vez se deriva del principio de relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan de aquél. Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, algo que es ineficaz entre las partes (como en este caso la afiliación al RAIS), si se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (en este caso Colpensiones).

Así se ha dicho que: “cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes”.

Es decir, que la inoponibilidad en este caso frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe, o en otras palabras para el caso concreto, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones, para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultarle oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

Por otro lado, importa asimismo precisar, que la parte accionante en principio era beneficiaria del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en razón a que, al 01 de abril de 1994, contaba con más de 35 años de edad, sin embargo, la misma perdió la cobertura del régimen de transición al haber efectuado traslado al RAIS. Esta situación se plantea teniendo en cuenta que las sentencias de unificación SU 062 - 2010 y 130 de 2013 de la Corte Constitucional, consideraron la posibilidad de que un afiliado pudiera regresar en cualquier tiempo al régimen de prima media, siempre y cuando tuviera más de 15 años cotizados al 1 de abril de 1994, condición que no aplica para el presente caso, dado que la accionante no cuenta con dichas cotizaciones a esa fecha.

Así lo expreso la Corte en la referida Sentencia SU 062 de 2010: Los beneficiarios del régimen de transición tienen libertad para escoger el régimen pensional al que se desean afiliar y también poseen la facultad de trasladarse entre ellos, pero la escogencia del régimen de ahorro individual o el traslado que hagan al mismo trae para ellos una consecuencia: la pérdida de la PORVENIR del régimen de transición. En ese sentido, estas personas, para pensionarse, deberán cumplir necesariamente con los requisitos de la ley 100 de 1993 según el régimen pensional que elijan y no podrán hacerlo de acuerdo con las normas anteriores, aunque les resulten más favorables. Es evidente que, en el caso de las personas amparadas por el régimen de transición, el efecto del traslado tiene importantes repercusiones en el goce del derecho a la pensión de vejez y, por tanto, en el derecho fundamental a la seguridad social, ya que hace más exigentes las condiciones para acceder a la prestación referida. El traslado deja de ser entonces una

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

simple cuestión legal y adquiere una relevancia constitucional innegable por estar en juego un derecho fundamental. Aunque la Corte consideró acordes con la Constitución las disposiciones que prescriben que la PORVENIR de régimen de transición se extingue cuando la persona escoge el régimen de ahorro individual o se traslada a él, aclaró que las normas expresamente circunscriben tal consecuencia a sólo dos de los tres grupos de personas que ampara el régimen de transición: (i) mujeres mayores de treinta y cinco y (ii) los hombres mayores de cuarenta.

En ese orden, Las personas que contaban con quince años de servicios cotizados para el 1 de abril de 1994 no pierden los beneficios del régimen de transición al escoger el régimen de ahorro individual o al trasladarse al mismo, lo que se traduce en que, una vez hecho el traslado al régimen de prima media, pueden adquirir su derecho pensional de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993.

Bajo la anterior premisa, resulta claro que la expectativa pensional de la parte asegurada se circunscribía a los lineamientos del nuevo régimen general de pensiones, ya que la mayor cantidad de tiempo o capital acumulado lo reporta en el RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A, amén de que dicho traslado deba conservarse y declararse válido.

Para reforzar lo anterior, se trae a colación el reciente pronunciamiento expuesto por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-1452 de 2019 en la que se hacen precisiones respecto a la inversión de la carga de la prueba a favor del afiliado.

“... Según lo expuesto precedentemente, es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.


Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quien le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca.

En consecuencia, si se arguye que, a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que, si la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo

...

Mucho menos es razonable invertir la carga de la prueba contra la parte débil de la relación contractual, toda vez que, como se explicó, las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia frente al afiliado lego. A tal grado es lo anterior, que incluso la legislación (art. 11, literal b) L. 1328/2009), considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros”.

Puesto de presente el anterior panorama, se evidencia que, a la fecha, el traslado efectuado al RAIS, tiene plena validez y la afirmación de vicios del consentimiento del traslado de régimen suscrito con la AFP COLFONDOS y PORVENIR S.A., así como la omisión de información vital para haber efectuado el cambio de régimen, alegados por la demandante, deberá probarse en el desarrollo del proceso judicial con todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de contradicción.

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Adicionalmente, no puede perderse de vista que la eventual afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media y el traslado de los aportes al régimen en mención, depende de la decisión favorable que previamente obtenga el accionante por parte de un Juez de la República, respecto de la pretensión de declaratoria de nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual.

Así mismo, conforme lo estipulado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, se señala:


“(…) Después de un (1) año de la vigencia de la presente Ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez (…)

Teniendo en cuenta que la parte demandante contaba con 65 años, en consideración a que nació el 01 de mayo de 1957, deviene entonces la imposibilidad de trasladarse de régimen, según la normativa citada en líneas precedentes.

Aunado a lo anterior también es necesario tener en cuenta que la declaración de nulidad de traslado de la parte actora, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al RAIS afectaría ineludiblemente la sostenibilidad y estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, pues el esquema financiero del sistema pensional no está diseñado para soportar el cumulo de anulaciones de traslado, máxime, cuando en el presente caso la actora se encuentra dentro de la prohibición legal establecida en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

Así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia T-489 de 2010 donde señaló:

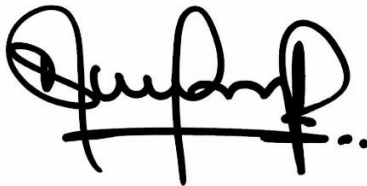
Existe plena libertad para que los afiliados se inscriban en cualquiera de los dos regímenes y para trasladarse del uno al otro. La única restricción acatada por la jurisprudencia constitucional, que se desprende del artículo 48 de la Constitución Nacional en el cual está sólidamente afinada, obliga al Estado a “garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional”. En virtud de esta disposición se explica la presencia de los incisos 4º y 5º del artículo 36 cuando establecen como excepción que: “Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. Restricción que, como se vio, persigue evitar el detrimento económico a que, en particular, se ve sujeto el régimen de prima media. En este contexto económico financiero la Sala rescata y apoya las medidas de orden legal avaladas por la Corte Constitucional para garantizar la solidez financiera del sistema pensional como son: El cumplimiento en un 75% de las cotizaciones, hasta completar los 15 años. La posibilidad de retornar al régimen de Prima Media con Prestación Definida, pero con la obligación de llevar a él la totalidad del ahorro realizado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), sin que este ahorro sea inferior al que se hubiera alcanzado al permanecer en el de Prima Media con Prestación Definida. La prohibición de cambiarse de régimen para personas a quienes les falten diez (10) años o menos para alcanzar la edad de pensión de vejez. La obligación de permanecer en el régimen que se escoja, durante cinco (5) años y no tres (3), como lo autorizaba el artículo 13 de la Ley 100, antes de cambiarse de régimen, por una sola vez. (Ley 797-03, art. 2º). (…)

	Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

Además, en estas condiciones por razones de equidad, para que no se beneficie de un fondo constituido por aportes de otras personas, y al cual ella misma no ha aportado la totalidad de las cotizaciones requeridas, entonces, se le negará su traslado al mismo. Pero especialmente se encuentra esta Sala de la Corte ante las serias motivaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional (sentencias C-1024-04 y C-789-02), asentadas sobre la sólida base del inciso 7º del artículo 48 de la Carta Suprema donde se ordena al Estado “garantizar...la sostenibilidad financiera del sistema pensional...”. Motivaciones que se verían afectadas, si se concediera a la actora, contrariando elementales criterios de equidad, su traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS - al de Prima Media con Prestación Definida.”

Por lo antes expuesto, emito concepto negativo para conciliar en el presente asunto.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá, el ocho (8) de agosto de 2023.



MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ
Secretaria Técnica de Comité de Conciliación y
Defensa Judicial de Colpensiones

Proyectó: APMB

RE: RADICACIÓN CERTIFICADO COMITÉ DE CONCILIACIÓN - 13001310500620230019000

Juzgado 06 Laboral Circuito - Bolívar - Cartagena <j06labcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 12/02/2024 10:51 AM

Para: Bernardo Ballesterio Petro <bballesteropetro@gmail.com>

Buenos días.

Se acusa recibido.

atte

Alba Luz Villanueva Martínez

Secretaria

De: Bernardo Ballesterio Petro <bballesteropetro@gmail.com>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 8:15 a. m.

Para: Juzgado 06 Laboral Circuito - Bolívar - Cartagena <j06labcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RADICACIÓN CERTIFICADO COMITÉ DE CONCILIACIÓN - 13001310500620230019000

Cartagena de Indias. D. T y C. 12 de febrero de 2024

Señor

JUZGADO 006 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA

E.S.D.

Demandante: DELCY DEL CARMEN VELASQUEZ JIMENEZ

Demandado: COLPENSIONES.

Radicado: 13001310500620230019000

Proceso: ORDINARIO LABORAL

ASUNTO: MEMORIAL CONCEPTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN

BERNARDO JOSÉ BALLESTERO PETRO, mayor de edad, identificado(a) con la Cedula de Ciudadanía No. 1.143.349.693 de Cartagena, abogado(a) en ejercicio con T.P. No. 228.332 del C.S. de la J., actuando como Apoderado Sustituto de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, tal como consta en el poder que obra en el Expediente, me permito aportar CERTIFICACIÓN No. 123452023, emitido por la SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL, dentro del proceso de referencia, en el cual la entidad demandada, manifiesta NO PROPONER FORMULA CONCILIATORIA, esto con el fin de que se tenga en cuenta en la audiencia de conciliación a celebrar.

ANEXOS

- Certificación No. 123452023 de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

Respetuosamente,

BERNARDO JOSÉ BALLESTERO PETRO
CC. 1.143.349.693 de Cartagena
TP. No. 228.332 DEL C.S. DE LA J.

--

Bernardo Ballesteros Petro
Abogado & Economista
Especialista en Derecho Administrativo